

PARA DIFUSIÓN: EL SÁBADO 9 DE MARZO DE 1991

Para mayor información:

*Cynthia Arnson (Washington) 202-371-6592 ofc.
202-667-5543 casa*

Juan E. Méndez 202-371-6592 ofc.

En un amplio informe publicado para coincidir con las elecciones legislativas y municipales en El Salvador, Americas Watch concluye que, a pesar de una reducción en el número de los abusos en algunas categorías en la segunda mitad del año pasado, la situación de los derechos humanos en ese país todavía es precaria. Las bajas civiles resultantes de la ofensiva guerrillera de fines de 1990 y la violencia política relacionada con las elecciones próximas, dejan bien claro que cualquier progreso en la situación general de los derechos humanos será tenue mientras no esté acompañado del fin de la impunidad de los militares y de una resolución del conflicto.

Desde que empezaron los negociaciones con mediación de la ONU en abril de 1990 hasta fines de ese año, hubo un cambio notable en la vigencia de los derechos humanos en El Salvador. Las violaciones denunciadas, que incluyen desapariciones, asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte, y muertes atribuidas a las fuerzas armadas de seguridad, bajaron en cantidad con relación al primer semestre del año; en algunas categorías los casos se redujeron a la mitad. Violaciones cometidas por la guerrilla, incluyendo secuestros y asesinatos, se mantuvieron al mismo nivel el año entero, pero con cifras menores que en 1989.

Desafortunadamente, esta tendencia se revirtió en los primeros meses del corriente año, como se refleja en el asesinato de dos militares estadounidenses por parte de combatientes del FMLN después de derribar su helicóptero; en la matanza de quince civiles en El Zapote; en la destrucción de las oficinas y maquinaria del periódico de centro-izquierda Diario Latino; en un ataque con granadas a las oficinas de la Convergencia Democrática en Usulután; y en el asesinato de un candidato de la Unión Democrática Nacional y de su esposa embarazada.

Las esperanzas de que pueda continuar la tendencia de fines de 1990, se ven disminuidas por la incapacidad del sistema judicial de hacer justicia en los casos importantes de derechos humanos, aun en aquellos que han recibido atención internacional. En 1990 se registraron retrocesos en el caso de San Sebastián, donde el Ejército mató a diez civiles en 1988, y que el gobierno de Estados Unidos había identificado como una prueba de fuego del sistema judicial salvadoreño. Es posible que en 1991 se les enjuicie a nueve acusados de la matanza de seis jesuitas, de su sirvienta y de la hija de ella, que ocurrió en noviembre de 1989. No es probable, sin embargo, que los que ordenaron el crimen sean jamás juzgados.

El FMLN también recibe intensas presiones para enjuiciar a los responsables del asesinato de dos militares norteamericanos en enero pasado, después de que su helicóptero fuera derribado. Americas Watch ha exhortado al FMLN a que conduzca una investigación completa e imparcial sobre el crimen y castigue a los responsables.

Unas de las preocupaciones más importantes reflejadas en el informe son las siguientes:

- Aunque había amplia participación de los partidos políticos en las elecciones legislativas y municipales del 10 de marzo próximo, la violencia que rodea a las elecciones es mayor que la que precedió a la elección presidencial del año 1989, a pesar de que el FMLN se ha comprometido a no desplegar acciones militares para impedirlas.

- El fuego indiscriminado de bombardeo, metralleta a morteros que han lanzado la Fuerza Aérea y el Ejército han causado varias bajas en la población civil que se podían haber evitado. En meses recientes, los ataques indiscriminados del FMLN contra instalaciones militares en áreas urbanas, utilizando morteros de fabricación casera, como así también industriales, no han alcanzado sus blancos, también han contribuido al aumento de bajas.

- Sin perjuicio del problema de la impunidad de las fuerzas armadas en crímenes de derechos humanos, el FMLN también debe desarrollar un sistema justo de castigo para sus propios miembros que cometan abusos.

- Miembros de las unidades de defensa civil siguen involucrados en graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen asesinatos, robos, lesiones, violaciones y abusos de autoridad.

- Tanto las fuerzas del gobierno como el FMLN han ejecutado a prisioneros, así como a adversarios que se encuentran fuera de combate a raíz de sus heridas. Aunque Americas Watch no tiene evidencias para afirmar que uno u otro bando tenga como política llevar a cabo tales ejecuciones, el número de casos documentados de este tipo de violación es altamente alarmante.

- Aunque los asesinatos perpetrados por los escuadrones de la muerte bajaron notablemente a

fines de 1990, en el primer semestre de ese año, ocurrían aproximadamente al doble de la frecuencia del año anterior. A principios de 1991, la cifra de este tipo de asesinatos volvió a subir.

- El Ejército creó una oficina de derechos humanos en abril de 1990, que empezó a funcionar en julio. Esto puede representar un paso positivo en la aceptación de responsabilidad institucional por parte de las fuerzas armadas respecto a la investigación de los abusos de los derechos humanos y el castigo de los culpables. Hasta ahora, sin embargo, esa oficina de derechos humanos se ha limitado a denunciar sólo los abusos supuestamente cometidos por el FMLN.

Prepararon este informe Cynthia Arnson, Directora Adjunta de Americas Watch, que ha publicado extensamente sobre El Salvador, y David Holiday, Director de la oficina de Americas Watch en San Salvador.

Americas Watch es una organización no gubernamental creada en 1981 para observar la situación de los derechos humanos en América Latina y el Caribe y para promover el respeto por las pautas internacionalmente reconocidas. Su Presidente es Adrian DeWind; Vicepresidentes, Peter Bell y Stephen Kass. Su Director Ejecutivo es Juan E. Méndez; las Directoras Adjuntas son Cynthia Arnson y Anne Manuel. David Holiday es Director de la oficina de Americas Watch en San Salvador.

Americas Watch es parte de **Human Rights Watch**, una organización que también abarca a Africa Watch, Asia Watch, Helsinki Watch y Middle East Watch. El Presidente de Human Rights Watch es Robert L. Bernstein; Vicepresidente, Adrian DeWind. Aryeh Neier es Director Ejecutivo; Subdirector, Kenneth Roth; Directora en Washington, Holly J. Burkhalter; Directora en California, Ellen Lutz; Directora de prensa, Susan Osnos; Asesora Jurídica, Jemera Rone.

Copias del informe, que cuesta US\$ 10.00, se pueden obtener a través de: Publications Department, Human Rights Watch, 485 Fifth Avenue, New York, NY 10017. Teléfono: 212-972-8400.